

2025ER0006563

17-01-2025

805.

Abogado
EDINSON GIOVANNY CAMACHO CABALLERO

Doctor
LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO
Contralor Provincial Ponente
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN
GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META
E. S. D


REFERENCIA. Proceso de responsabilidad fiscal
DISCIPLINADO. ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO
RADICACIÓN. PRF No. 80503-2017-28946.

ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO, mayor de edad y vecino de Barrancabermeja, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.493.663, manifiesto a usted muy comedidamente, que confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** en derecho al abogado **EDINSON GIOVANNY CAMACHO CABALLERO**, mayor de edad, abogado titulado e inscrito, también de esta vecindad, identificado con la cedula de ciudadanía y la tarjeta profesional de abogado que obra bajo su firma, para que me represente y actúe como mi defensor en el proceso de responsabilidad fiscal PRF No. 80503-2017-28946.


Faculto a mi apoderado de conformidad a lo previsto por en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, las normas de la ley 610 de 2000, así como el artículo 75 del Código General del Proceso y demás normas aplicables para atender el presente trámite., en especial la de presentar descargos, solicitar y participar en la práctica de pruebas, solicitar nulidades, ejercer recursos pertinentes, así como cualquier otro poder para el correcto ejercicio de la defensa.

El correo electrónico de mi apoderado es: giovannyjuridico@gmail.com

Del señor Contralor, atentamente,


ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO
ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO
C.C No. 63.493.633

Acepto,


EDINSON GIOVANNY CAMACHO CABALLERO
C.C. No. 1098.654.105 de Bucaramanga
T. P. No. 199645 del C. S. de la J.



Solicitud documentos adjuntos al poder conferido por Ana Milena Estupiñan

Desde Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) <luis.villalba@contraloria.gov.co>

Fecha Mar 21/01/2025 3:55 PM

Para giovannyjuridico@gmail.com <giovannyjuridico@gmail.com>

Doctor Edinson Giovanni buenas tardes;

En procura de tener ajustado a derecho copia del poder conferido, se hace necesario adjuntar; copia autentica cedula de ciudadanía y Tarjeta Profesional.

Cordialmente,



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



Defender juntos los recursos
públicos i Tiene Sentido!

Luis Alfonso Villalba Cruz

Profesional universitario Grado 01 – GRF

Gerencia Departamental Colegiada del Meta

CC. Llanocentro, Av. 40 con Calle 15 Esquina.

Villavicencio, Meta.

PBX: (601) 5187000 Ext: 24800 a 24806 Tel: (608) 6701010

E-Mail: luis.villalba@contraloria.gov.co



www.contraloria.gov.co


807

CÉDULA DE CIUDADANÍA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

IDENTIFICACION PERSONAL
1.098.854.105
CAMACHO CABALLERO
EDINSON GIOVANNY






FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1988
SABANA DE TORRES
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 0+ M
ESTATURA PESO SEXO
20-JUN-2008 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION
CÉDULA DE CIUDADANÍA
CÓDIGO DE VERIFICACION



A 2710160 0025421 547 00051105 20101116 00248107600 1 7174192001

908

TARJETA PROFESIONAL

313606			REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO				
189648	04/02/2011	13/12/2010		
TARJETA NO.	Expedición	Caducidad		
EDINSON GIOVANNY CAMACHO CABALLERO				
1098064195	SANTANDER			
Código	Consejo Seccional			
INDUSTRIAL DE SITIOS				
Unidad				
Augusta Linares Ochoa			[Signature]	
Presidenta Consejo Superior de la Judicatura				



AUTO N°: 019

FECHA: 27 de enero de 2025

PÁGINA 1 DE 3

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL META

“MEDIANTE EL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.PRF-80503-2017-28946”

TRAZABILIDAD N°	2017IE00004277/2017/04/01/ANT_IP-2016-02415
CUN SIREF	AC-80503-2017-28946
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°	PRF-80503-2017-28946
ENTIDAD AFECTADA	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL Nit. 899.999.068-1
CUANTÍA DE DAÑO	Doscientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos Once Mil Setecientos Catorce Pesos Mcte (\$288.711.714.00)
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES	<p>Corporación Red País Rural Identificado con Nit. 830.131.208 representada Legalmente por Fredy Antonio Vargas Ramírez o por quien haga sus veces en calidad de Contratista denominada Entidad Ejecutora Privada del Convenio 5211512</p> <p>Julio Cesar Zuleta Fuentes identificado con cédula de ciudadanía No. 79.524.894 en calidad de Líder Grupo Regional Gestión Social Meta Vichada (Ecopetrol)</p> <p>Ana Milena Estupiñán Pinto identificada con cédula de ciudadanía No. 63.493.663 en calidad de Gestora Técnica (Interventoría ECP)</p> <p>María del Carmen Tonelli Sokolich identificada con cédula de Extranjería No.249.974de Bogota D.C, en calidad de directora Gestión Social.</p> <p>Gonzalo Murillo Escobar Identificado con C.C. 7.538.570 en calidad de Administrador del Convenio 5211512.</p>
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	SEGUROS COLPATRIA S.A. identificada con Nit. 860.002.184-6, en virtud de la póliza de seguro de manejo global bancario. Amparo: infidelidad. Por valor de \$100.00.000 dólares EE.UU. con vigencia del 15/06/2013-15/06/2014.

ASUNTO

El Directivo Colegiado Ponente; actuando en virtud de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias, procede a **RECONOCER PERSONERÍA**

"MEDIANTE EL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80503-2017-28946"

JURÍDICA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80503-2018-33202, cuya entidad afectada es **ECOPETROL SA.**

CONSIDERACIONES

Mediante correo electrónico de fecha 21 de enero del año 2025, remitido desde el buzón giovannyjuridico@gmail.com el doctor Édison Giovanny Camacho Caballero identificado con cédula de ciudadanía No.1.098.654.105 (de Bucaramanga) Y tarjeta profesional No.199645 del C. S de la Judicatura, allega documentos en representación de Ana Milena Estupiñán Pinto; presunta responsable dentro del Proceso de responsabilidad fiscal PRF-80503-2017-28946

Con el fin de hacer entrega del poder otorgado por la señora Ana Milena Estupiñán Pinto, para que el doctor Édison Giovanny Camacho Caballero, ejerza su defensa técnica dentro de la presente actuación fiscal.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Directivo Colegiado Ponente de la Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloría General de la República,

RESUELVE

PRIMERO: **RECONOCER PERSONERÍA JURÍDICA** al doctor **Édison Giovanny Camacho Caballero** identificado con cédula de ciudadanía No.1.098.654.105 (de Bucaramanga) Y tarjeta profesional No.199645 del C. S de la Judicatura, y notificación electrónica giovannyjuridico@gmail.com; con el fin de que actúe como apoderado judicial de la implicada Ana Milena Estupiñán Pinto, dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal.

SEGUNDO: **CONCEDER** acceso al expediente digital al abogado mediante la plataforma ONE DRIVE enviando el link de acceso a su correo electrónico, una vez se notifique la presente decisión.

TERCERO: **NOTIFICACIÓN.** Notifíquese el presente Auto por **ESTADO**, de conformidad con el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y Ley 2080 de 2021.

810



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 019

FECHA: 27 de enero de 2025

PÁGINA 3 DE 3

"MEDIANTE EL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80503-2017-28946"

CUARTO: SIN RECURSOS. Contra el presente proveído no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO
Contralor Provincial - Ponente

Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) ha compartido la carpeta "2017-28946" contigo

Desde Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) <luis.villalba@contraloria.gov.co>

Fecha Lun 27/01/2025 11:33 AM

Para giovannyjuridico@gmail.com <giovannyjuridico@gmail.com>

CCO INVITACION A USUARIO EXTERNOS <invitacionausuarioexternos@contraloria.gov.co>



Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) compartió una carpeta contigo

conforme su solicitud estoy compartiendo por ONEDRIVE acceso archivo
PRF80503-2017-28946

_ 2017-28946



Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

[Abrir](#)

Rda: 27-01-2025.

812

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

Villavicencio, 23 de enero de 2025

Doctor

LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO

Contralor Provincial Ponente

Gerencia Departamental Colegiada del Meta

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

E.

S.

D.

REFERENCIA: PROCESO DE
RESPONSABILIDAD

FISCAL

INVESTIGADO: MARIA DEL CARMEN
TONELLI

PROCESO: PRF-80503-2017-28946

CARLOS ALEJANDRO BAUTISTA EUGENIO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.956.345 expedida en Villavicencio y portador de la tarjeta profesional 407.023 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de confianza de la doctora **MARIA DE CARMEN TONELLI**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.525 de Bogotá D.C, investigada en el proceso de la referencia, PRF80503-2017-28946.

Actuando dentro de la oportunidad procesal y legal, por medio del presente escrito, procedo a presentar los ARGUMENTOS DE LA DEFENSA tendientes a desvirtuar la imputaciones endilgadas por medio del auto 0392 del 16 de noviembre de 2024, notificado personalmente el día 13 de enero de 2025. El presente escrito encuentra sustento en las siguientes consideraciones.

I. HECHOS

Como hechos relevantes al interior de la actuación tenemos.

1. Ecopetrol S.A, celebra el convenio de colaboración No. 5211512 de 2012, con la fundación Red País Rural, el cual tuvo por objeto el fortalecimiento de las capacidades productivas de las asociaciones y sectores productivos identificados como altamente competitivos en marco de los procesos y planes regionales de desarrollo desde una perspectiva de sostenibilidad y corresponsabilidad institucional. El convenio se financio con aportes de las partes, así: de Ecopetrol SA \$3.375.000.000,00 y de la Corporación Red País Rural \$135.000,00.

Posteriormente se realizaron prorrogas y adiciones por parte de Ecopetrol S.A a la fundación colaboradora, teniendo como tiempo de ejecución del mismo 18 meses y monto total de \$12.246.138.689,00 pesos colombianos.

2. El día 28 de abril de 2014 se suscribe el acta de finalización. En el mes de octubre se requiere al contratista para hacer pagos a proveedores, quien manifiesta tener embargada la cuenta bancaria, donde se consignaron los recursos del convenio, por la DIAN. Una vez se verifica por ECP esta situación se evidencia que el recurso no se encuentra en bancos.

3. El 27 de febrero de 2016, se liquida el convenio, resultando un saldo a favor de Ecopetrol por el valor de \$3.043.984.518,01, por concepto de actividades no ejecutadas por País Rural discriminando el valor así:

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 5211512							
CONVENIO	APORTE DE ECOPETROL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO FINANCIERO	% EJECUTADO TECNICO	VALOR NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO TECNICO
PRIMIGENIO	\$ 3.375.000.000,00	\$2.781.935.296,64	82%	82%	\$ 593.064.703,36	18%	18%
ADICIONAL No. 1	\$ 2.000.000.000,00	\$1.906.288.286,00	95%	61%	\$ 93.711.714,00	5%	39%
ADICIONAL No. 2	\$ 4.523.532.998,00	\$2.192.877.638,00	48%	65%	\$ 2.330.655.360,00	52%	35%
ADICIONAL No. 3	\$ 2.347.605.693,00	\$2.016.586.633,00	86%	100%	\$ 331.019.058,00	14%	0%
TOTAL	\$12.246.158.689,08	\$ 8.897.687.853,64	73%	77%	\$ 3.348.450.835,36	22%	23%
REÍTEGRO DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO					\$ 304.466.317,35		
REDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA FIDUCIA					\$ 85.211.725,15		
SALDO A FAVOR DE ECOPETROL					\$ 3.043.984.518,01		

4. Se realizo afectación de la póliza de cumplimiento del convenio investigado, expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia, numero 905-47-994000000913, por el incumplimiento de Red País Rural en el marco de las obligaciones del mencionado convenio 5211512.
5. La aseguradora solidaria de Colombia, la cual expidió la póliza 905-470000000913, en la cual se amparaba el cumplimiento del convenio objeto de presente proceso, con fundamento en la reclamación que presento la Empresa Colombiana de Petróleos, reconoce del saldo de \$2.755.272.804 de pesos, dejando como saldo no reconocido el valor de \$288.711.714 de pesos, producto de la objeción parcial que hizo a la reclamación que realizó ECOPETROL S.A, la mencionada objeción encontró sustento factico en que el saldo no reconocido correspondió al giro del adicional 1, el cual no se hizo a la cuenta del encargo fiduciario sino a la cuenta personal del contratista.

II. IMPUTACION A CONTROVERIR

Una vez realizado un recuento de las situaciones fácticas relevantes del caso, procedo a exponer los argumentos para la defensa, tendientes a desvirtuar la imputación que realizó el señor Contralor provincial ponente, por medio del auto 0392 del 15 de noviembre de 2024, en donde endilgo la responsabilidad fiscal por el valor de 288.711.714 de pesos y califico que la conducta de mi defendida la doctora María del Carmen Tonelli a título de CULPA GRAVE, como se transcribe a continuación:

“ARTICULO PRIMERO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL de forma solidaria a título de CULPA GRAVE, dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, No. PRF-80503-2017-28946, que se adelanta con ocasión del daño patrimonial causado a los intereses patrimoniales de la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. por la suma no indexada de Doscientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos Once Mil Setecientos Catorce pesos (\$288.711. 714.00) M c t e . Encontrade Corporación Red País Rural identificado con Nit. 830.131.208 representada legalmente por Fredy Antonio Vargas Ramirez o por quien haga sus veces en calidad de Contratista o Entidad Ejecutora Privada del Convenio 5211512, con dirección de notificación Calle 13 No.6-82 Ofc-506 Bogotá D.C dirección@paisrural.org, **JULIO CESAR ZULETA FUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.524.894 en calidad de Líder Grupo Regional Gestión Social Meta Vichada (Ecopetrol). Con domicilio en la Carrera 50 No. 12-04 Sur casa 52 Serramonte 5 en la ciudad de Villavicencio. Julio.zuleta@ecopetrol.com.co, jzuletaf@gmail.com, Ana Milena Estupiñán Pinto identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.493.663 en calidad de Gestora Técnica (Interventoría ECP). Con domicilio en la Carrera 20 No.

19-68 Apto 401 san francisco Villa Rosario 1 en la Ciudad de

Bucaramanga Ana.estupinan@ecopetrol.com.co María del Carmen Tonelli Sokolich identificada con cedula de extranjería No.249.974 Expedida en Bogotá D.C En calidad de directora de Gestión Social de ECOPETROL S.A, con dirección de notificación Carrera 4 9 B N o . 1 0 4 A-26 Bogotá D.C marai.tonelli@ecopetrol.com.co y Gonzalo Murillo Escobar identificado con cédula de ciudadanía No. 7.538.570 expedida en Bogotá D.C. En calidad de administrador del convenio 5211512, con dirección de notificación gonzalo.murillo@ecopetrol.com.co"¹

De manera que para el despacho del contralor VALLEJO ARAUJO, están plenamente demostrados los elementos de la responsabilidad fiscal, trayendo consigo la imputación antes reseñada por medio del auto 0392 de 2024.

III. ARGUMENTOS PARA DESVIRTUAR LA IMPUTACION

Previo a emprender el análisis correspondiente a los argumentos para desvirtuar la imputación, no puede esta defensa dejar pasar que el proceso de responsabilidad fiscal debe garantizar los derechos de los presuntos responsables, en atención a lo normado en el artículo 29 Constitucional aplicable al proceso de responsabilidad fiscal conforme al artículo 2° de la Ley 610 de 2000, que consagra que "el ejercicio de la acción fiscal se garantiza el debido proceso y su trámite se ajustará con sujeción a los artículos 29 y 209 Constitucional".

¹ Auto 0392 del 15 de noviembre de 2024, páginas 36 y 37.

A. De la nulidad

El artículo 36 de la Ley 610 de 2000, dispone que:

“Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal:

1. La falta de competencia del funcionario instructor
2. La violación del derecho de defensa del implicado
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que, en el trámite del proceso están configuradas las causales 2 y 3 de la norma citada, por cuanto no se notificó de forma legal a la doctora MARIA DEL CARMEN TONELI, quien fue citada como parte del proceso. Solicitud que se realiza dentro de la oportunidad procesal correspondiente en los términos del artículo 38 de la Ley 610 de 2000.

a. Por indebida notificación y no cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

Al realizar el análisis pertinente al caso sub examine, para demostrar al operador jurídico que efectivamente aparece acreditada la causal de nulidad que se deprecia, se tienen los siguientes hechos:

1. Por auto del seis (6) de septiembre de 2022 la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, profiere “AUTO MIXTO DE

**VINCULACIÓN Y ARCHIVO PARCIAL DENTRO DEL PROCESO
ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 80503-3017-
28946", en el que señaló:**

Teniendo como base el análisis adelantado a las pruebas trasladadas con el hallazgo y a las recaudadas en el desarrollo del presente proceso de responsabilidad fiscal, ya relacionadas en escrito que precede, este ente de Control pudo establecer que los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, esto es, en calidad de gestores fiscales, fueron determinantes en la configuración del daño al patrimonio de la entidad pública ECOPEPETROL., con ocasión, como ya se ha venido mencionado, del giro de recursos por valor de \$2.000 millones de pesos correspondientes al Adicional No. 1 del Convenio 5211512, a la cuenta de la Entidad Ejecutora y no a la cuenta de la Fiducia constituida para tal fin, y que por consiguiente se procederá su vinculación, son los que a continuación se relacionan:

- 1.1 **MARIA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH** identificada con cédula de extranjería No. 249.974 expedida en Bogotá con dirección de residencia en la Carrera 49 B No. 104 A-26 en la ciudad de Bogotá D.C., quien respecto del Convenio 5211512 ejercía las funciones de Directora de Gestión Social, y que además fue quien de manera directa aprobó el giro del recurso materia de la presente investigación.

2. Así mismo, la mencionada providencia en la parte resolutive señaló:


SEGUNDO: VINCULAR en calidad de presunto responsable dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, de acuerdo a lo contenido en la parte considerativa de la presente providencia y lo contenido en el Auto No. 054 de fecha 19 de febrero del año 2021 mediante el cual se apertura el presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal al señor **GONZALO MURILLO ESCOBAR** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.538.570 expedida en Bogotá D.C., en calidad de administrador del Convenio 5211512 y la señora **MARIA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH** identificada con cédula de extranjería No. 249.974 expedida en Bogotá en Calidad de directora de Gestión Social, quien aprobó el giro del recurso investigado.

3. Por su parte dispuso la NOTIFICACIÓN PERSONAL a la doctora **MARIA DEL CARMEN TONELLI** del auto de apertura de responsabilidad fiscal, así:

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
 Abogado U. Externado de Colombia
 Maestrando en Administración Pública ESAP

QUINTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE, una vez se suita el GRADO DE CONSULTA, la presente decisión y el auto No. 054 del 19 de febrero del año 2021

27

AUTO No. 400		 CONTRALORIA <small>GENERAL DE LA REPUBLICA</small>
FECHA: 06/09/2022		
PAGINA 45 DE 46		

"AUTO MIXTO DE VINCULACIÓN Y ARCHIVO PARCIAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF: 80503-2017-28946

mediante el cual se apertura el presente proceso de responsabilidad fiscal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los términos de lo señalado en los artículos 66 y subsiguientes de la ley 1437 de 2011 a los presuntos responsables que se identifican a continuación:

1. MARIA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH identificada con cédula de extranjería No. 249.974 expedida en Bogotá con dirección de residencia en la Carrera 49 B No. 104 A-26 en la ciudad de Bogotá D.C. En Calidad de directora de Gestión Social, quien aprobó el giro del recurso investigado.

4. Pese a que la orden dada por la Colegiada del Meta consistió en notificar personalmente a la señora MARIA DEL CARMEN TONELLI, no obra dentro del expediente digital, citación alguna que diera lugar a la notificación personal, por el contrario lo único que obra dentro del expediente es la citación a versión libre y espontánea dentro del PRF 2017-28946, así:

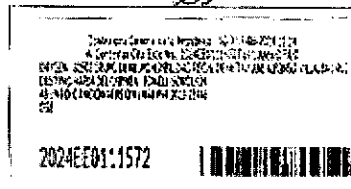


Página 1 de 2

80503-

Villavicencio, 17 de junio de 2024

Señora
MARÍA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH
Carrera 49 B No. 104 A-28
Bogotá D. C.




Asunto: Citación Versión libre y espontánea –PRF 2017-28846

Conforme contenido del auto de vinculación No.400 de 2022, mediante el cual se le vincula como presunta responsable Fiscal dentro del PRF 80503-2017-28846 aperturado en su contra y, conforme lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 510 de 2000, de donde en aras de garantizar su derecho a la defensa, se le ha programado fecha para la recepción de versión libre y espontánea dentro de la actuación Fiscal del asunto; sírvase comparecer a este despacho Ubicado en la avenida 40 Calle 15 esquina, Centro Comercial Llanocentro piso 3º de la ciudad de Villavicencio, el próximo lunes 24 de junio de 2024, a las 09:00 A.M. con el fin de ser escuchado en Versión Libre y espontánea, conforme diligencia Fiscal adelantada en su contra, por esta Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

Se le recuerda la oportunidad de ser asistido por un profesional del Derecho, además, cuenta con la oportunidad de rendir su versión sobre los hechos en forma escrita y o, solicitar el suministro de información relacionada al correo responsabilidadfiscalcor@contraloria.gov.co, indicando número del proceso, asunto, contralor provincial y el abogado sustanciador concededor del proceso.

Atentamente,

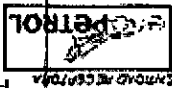
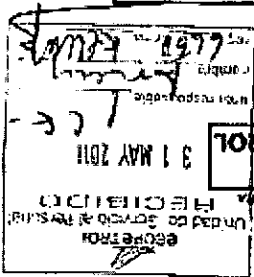

LUIS ALFONSO VILLALBA CRUZ
Luis.Villalba@contraloria.gov.co
Profesional Universitario G-01
Grupo Responsabilidad Fiscal

Citación que fue enviada mediante orden de servicio No. 17244528 P-085 a través del correo postexpress de la Empresa Servicios Postales Nacionales, guía que no indica los si fue o no enviada o si fue o no recibida o rechazada, folio 564 carpeta 2 del expediente digital.

5. Aunado a ello, se tiene que conforme al formato único de hoja de vida de persona natural visible a folio 580 de la carpeta 2 del

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

expediente digital, denominado "558-586 Dil Citaion.PDF, en el que se allega los datos de la señora MARIA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH, se indica como dirección de correspondencia la "CARRERA 49B No. 104ª-26 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ" pero pese a ello en la dirección citada en la comunicación por medio de la cual se citaba a versión libre y espontánea se indico como dirección la "CARRERA 49B No. 104ª-28 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ", como se demuestra así:



Persona Natural
(Leyes 150 de 1993, 489 y 443 de 1996)

HOJA DE VIDA

FORMATO UNICO

✓ 14.92653



na 1 de 2

DATOS PERSONALES									
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES					
TONELLI		SOKOLICH		MARIA DEL CARMEN					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		SEXO		NACIONALIDAD		PAIS			
C.C.	C.E.	PAS.	No.	249974	F	X	M	COL	ARGENTINA
LIBRETA MILITAR									
PRIVADA CLASE		SEGUNDA CLASE		NUMERO		3		D.M. 3	
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO									
FECHA		D/A	10	MES	4	ANO	1984	CARRERA 49B x 104A - 28	
PAIS		ARGENTINA		PAIS		COLOMBIA		TELEFONO 601 6234137	
DEPTO		SANTIAGO DEL ESTERO		DEPTO		CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO		BOGOTA		MUNICIPIO		BOGOTA		EMAIL mana.tonelli@ecopetrol.com.co	
DIRECCION		CARRERA 49B x 104A-26		MUNICIPIO		BOGOTA		PAIS COLOMBIA	

917

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

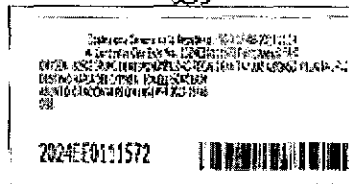


Página 1 de 2

80503-

Villavicencio, 17 de junio de 2024

Señora
MARIA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH
Carrera 49 B No. 104 A -28
Bogotá D. C.



Asunto: Citación Versión libre y espontánea -PRF 2017-28846

6. Así mismo, dicha falencia no puede subsanarse con la citación que reposa a folio 581 de la carpeta digital No. 2, a versión libre, pues la misma fue remitida por correo electrónico a la dirección maria.tonelli@ecopetrol.com.co folio 582, pero que no se pudo entregar, tal como consta a folio 583 así:

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

No se puede entregar: Citación versión libre PRF 2017-28946

Mail Delivery System <no-reply@times.trendmicro.com>

Wed 06/05/2024 11:17 AM

Para Maria Lorena Lopez <maria.lopez@ecopetrol.com.co>

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

maria.lopez@ecopetrol.com.co

El dominio del destinatario ha rechazado su mensaje. Esto se debe a que la dirección de correo electrónico del destinatario no está incluida en el directorio del dominio. Puede que no esté bien escrita o que no exista. Siga las indicaciones siguientes que sean necesarias para intentar solucionar el problema:

1 Vuelva a enviar el mensaje: elimine y vuelva a escribir la dirección antes de volver a enviar el mensaje. Si su programa de correo le muestra una sugerencia automática, no la seleccione, escriba la dirección de correo electrónico completa.
2 Borre la Lista de Autoconcluir del programa de correo según los pasos indicados en este artículo. A continuación, vuelva a enviar el mensaje.

Si es administrador de correo

El bloqueo general basado en directorios está habilitado en la organización del destinatario y no se ha encontrado el destinatario en el directorio. Si el remitente usa la dirección de correo electrónico correcta, pero sigue teniendo este problema, póngase en contacto con el administrador de correo del destinatario y avise a ambos del problema. Para solucionarlo, tienen que volver a sincronizar los directorios locales y en la nube.

La siguiente organización rechazó tu mensaje: ecopetrol-com-co@mail.protection.outlook.com.

Y ante esa situación fue que se remite por el servicio postal de Colombia 472 a la dirección carrera 49B No. 104^a-28 y por ello se indicó que fue devuelto por no reside como consta en la nota a mano impresa en la guía, y era lógico porque la dirección estaba errada:

818

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

Remite: 2024EE0111572 LUIS ALFONSO VILLALBA CRUZ Profesional Universitario G 01 Gerencia Departamental Colegiado del Meta Avenida 40 Calle 15 Esquina Centro Comercial Llano Centro Piso 4 Villavicencio Meta	Destinatario: MARIA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH Carrera 49B N° 104ª - 28 Bogotá D.C

Devuelto x no recibo

7. Por otra parte, se tiene que la Contraloría conforme al expediente digital obrante en 4 carpetas, no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los términos de lo señalado en los artículos 66 y ss de la Ley 1437 de 2011, porque omitió la notificación en todas sus formas a la señora MARIA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH, pues no obra el acto de notificación por aviso ni el acto administrativo proferido por la secretaria común y el contralor directivo ponente que ordene y disponga la notificación.

Y como consecuencia de ello, no se podía inferir la negativa de la presunta responsable fiscal de hacerse parte dentro del proceso, en los términos del artículo 42 de ley 610 de 2000, que indica:

“Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de la indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y

espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado.

En todo caso, no podrá dictarse auto imputación de responsabilidad fiscal si el presunto responsable y no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontáneo o no está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado

8. No obra en el expediente el acto administrativo en expedido por la secretaría común de la Contraloría en virtud del cual se realice la citación para la notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal y del auto que dispone la vinculación de la señora MARIA DEL CARMEN TONELLI al proceso de responsabilidad fiscal No. 80503-2017-28946, como si se hizo en el caso del presunto responsable fiscal País Rural.

9. Por su parte sin auto que ordenara la designación de defensor de oficio ni menos de estudiante jurídico de consultorio de Universidad alguna, se libra comunicación al Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, para designar a estudiante de derecho como persona idónea para ejercer como apoderada de oficio de la señora MARIA DEL CARMEN TONELLI SOKOLICH, a quien el once (11) de octubre de 2024, procedieron a posesionarla como defensora de oficio, sin haberse realizado el trámite previo de notificación de los actos administrativos que impone la ley hacerlo personalmente, violado además el principio de igualdad, pues en el caso de otros presuntos responsables, el trámite si se surtió, ver folio 756 y ss del expediente.

Según el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 104 de la Ley 1474 de 2011, se puede notificar personalmente al Presunto Responsable fiscal, a su Representante o Apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. Los artículos 104 y 106 de la Ley 1474 de 2011, indican que se debe aplicar el sistema de notificación personal previsto en la Ley 1437 de 2011. De conformidad con lo consagrado en el artículo 106 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, únicamente deberán notificarse personalmente el auto de apertura, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia, para éstas providencias se aplicará, el sistema de notificación personal y por aviso previsto en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por estado. Igualmente en el trámite verbal, según el artículo 104 de la ley 1474 de 2011, el auto de apertura e imputación y la providencia que resuelve los recursos de reposición o de apelación contra el fallo de primera instancia.

10. Sumado a lo anterior, la Contraloría General, no atendido a la solicitud de la defensa de realizar la notificación personal del auto de apertura en la debida forma, ni mucho menos la realizo a la estudiante que fungió como defensora de oficio, a pesar de que era su obligación hacerlo más aún cuando privo a la doctora MARIA DEL CARMEN TONELLI de su garantía de defensa al no haberle comunicado en debida forma la notificación personal para que compareciera al proceso y pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción.

11. Al respecto el Consejo de Estado ha indicado:

"[...]. Si el acto administrativo que se encuentra viciado en su publicidad no le produce efecto al destinatario, es conclusión obligada que si lo en el previsto de todas maneras se ejecuta o se lleva a efecto tal situación, no puede tenerse como consecuencia de un acto administrativo sino como el resultado de una operación administrativa que sería ilegal por consistir, en la ejecución de un acto que aún no puede producir efectos por haberse omitido la notificación o, por haber sido esta indebidamente realizada.

Siendo la existencia y la validez del acto cuestiones diferentes a su ejecución, es también lógico concluir que la ilegalidad de esta no determina la invalidez de aquel y por ende, lo que procede en este caso, es cuestionar al acto de ejecución, pues éste es quien ostenta el vicio de ilegalidad y con fundamento en ello, solicitar la reparación del daño que se hubiese causado producto de la omisión de notificación del acto administrativo"

b. Por falsa motivación del auto de apertura de investigación fiscal

Esta causal de nulidad, se presenta en los términos del artículo 36 y 37 de la Ley 610 de 2000, en lo que respecta a la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, por cuanto al verificarse el contenido del auto de apertura de investigación fiscal de fecha 19 de febrero de 2021, no se tiene una certeza respecto a la existencia del daño patrimonial a ECOPETROL, lo que genera una falsa motivación, pues si bien es cierto para el ente de control fiscal existe "previamente certeza de la existencia del daño patrimonial al Estado en suma de \$288.711.714,00.", atendido al valor que no reconoció a pagar la aseguradora, ello no obedece a la realidad objeto del proceso y de ahí aflora la nulidad del auto de apertura de investigación fiscal.

Téngase en cuenta que el daño en materia fiscal tiene una regulación específica

Para llevar a esta conclusión, se tiene que:

1. Conforme a los hechos referidos en el auto de apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal, se indica en el numeral 3 de los hechos, lo siguiente:

3. El 27 de febrero de 2016 se liquida el Convenio², resultando un saldo a favor de ECP por la suma de **\$3.043.984.518,01**; los cuales a la fecha del traslado del hallazgo fiscal no habían sido reintegrados³

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 5211512							
CONVENIO	APORTE DE ECOPETROL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO FINANCIERO	% EJECUTADO TECNICO	VALOR NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO TECNICO
PRINCIPAL	\$ 3.325.000.000,00	\$ 2.721.945.196,15	82%	57%	\$ 593.054.803,85	18%	43%
ADICIONAL No. 1	\$ 2.277.100.000,00	\$ 1.106.137.244,00	48%	5%	\$ 1.170.962.756,00	52%	95%
ADICIONAL No. 2	\$ 4.523.232.500,00	\$ 1.157.577.038,00	26%	2%	\$ 3.365.655.462,00	74%	98%
ADICIONAL No. 3	\$ 2.347.603.691,00	\$ 2.016.586.413,00	86%	100%	\$ 321.017.278,00	14%	0%
TOTAL	\$12.446.138.689,00	\$ 8.897.687.853,64	72%	77%	\$ 3.548.450.835,36	28%	23%
REINTEGRO DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO					\$ 304.466.117,35		
REQUIMIENTOS FINANCIEROS EN LA FIDUCIA					\$ 85.211.725,15		
SALDO A FAVOR DE ECOPETROL					\$ 3.043.984.518,01		

Es decir que del adicional No. 1, el valor no ejecutado corresponde a NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$93.711.714,00) y además, se indicó que el porcentaje no ejecutado del adicional No. 1 corresponde al 5%, es por ello que, no se puede indicar que los \$288.711.714 correspondan a dicho adicional, ya que, se tiene por cierto que pese a que no fue girado a la cuenta de fiducia sino a cuenta directa del

contratista, el mismo se ejecutó en porcentaje financiero del 95%, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable.

En el presente caso, la suma por la cual se adelantando el proceso, no ha tenido en cuenta que el valor real que le correspondía al adicional No. 1, en los términos en que se indicó que se había incumplido, no fue por cuantía de \$288.711.714,00, pues esa suma de dinero, corresponde a \$93.000.000 que se acusaron como no ejecutados y, los gastos de administración del convenio, tal como reza la cláusula cuarta del convenio suscrito entre ECOPETROL y PAIS RURAL.

Y respecto a este tal como lo indicó la aseguradora, correspondían a gastos administrativos que tenía que asumir el contratante es decir ECOPETROL, y además lo que buscaba garantizaba la póliza era la correcta ejecución de los dineros para los ítems que se contrataron.

Véase como a folio 5 del expediente en el archivo denominado actos prelim se indica:

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

3. Costos administrativos de manejo del Convenio

En la cláusula cuarta del Convenio, al estipularse la obligación de ECOPEETROL de aportar la suma de \$ 3.375.000.000, las partes advirtieron que, de ese valor, \$ 195.000.000 son los costos administrativos generados por el manejo administrativo del Convenio, en aspectos tales como el acompañamiento financiero y contable a la ejecución de los recursos, el apoyo a la realización de compras y el apoyo a la gestión interinstitucional.

De esta manera, estos \$195.000.000 son un costo de ECOPEETROL que no puede trasladar a SÓLIDARIA como una pérdida.

En las explicaciones se aduce que no aparece una exclusión en la póliza sobre este particular.

En realidad el tema no es si aparece o no una exclusión, sino el hecho de que el objeto del amparo es indemnizar al asegurado los perjuicios derivados cuando los recursos aportados no hubieren sido utilizados en aquello para lo cual fueron entregados.

Y, en realidad, según el Convenio asegurado, \$ 195.000.000 de los recursos aportados por ECOPEETROL lo fueron para cubrir sus costos de administración del mismo, por lo cual a la luz del principio indemnizatorio que ilustra, con carácter de orden público, al contrato de seguro, no puede trasladarse a la aseguradora un costo que debe sufragar el asegurado.

Con apoyo, entonces, en el artículo 1.088 del C de Co ASEGURADORA SÓLIDARIA contractualmente no es responsable de asumir esta partida de costos del Convenio.

Significa que estos costos que ECOPEETROL obligatoriamente tenía que sufragar y, de reconocerlos iría en contra del principio indemnizatorio del contrato de seguro porque, lo que se pretendía con la póliza es indemnizar al asegurado de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento y, los costos administrativos son dineros que el contratante le entrego al contratista para el manejo del convenio.

Precisado lo anterior, es evidente que si del valor objeto del presunto daño patrimonial se deben descontar los \$195.000.000,00 por concepto de costos de administración del mismo, tal como fue aceptado el convenio, la suma que posiblemente puede ser objeto de reproche es de \$93.711.714,00, sin embargo cuando la funcionaria Rubiela Barajas, presento el oficio respuesta a la comunicación del 26 de septiembre de 2016, donde le solicita que aclare los siguientes interrogantes:

1. El anticipo del adicional 1.
2. Los gastos del convenio.
3. Los ítems no previstos ejecutados.

De la respuesta dada por la funcionaria se tiene:

Llama la atención del escrito de la aseguradora que únicamente se refiera a lo acontecido en el Adicional No.1, desconociendo que para cada uno de los giros efectuados por Ecopetrol tanto para el aporte inicial, como para los Adicionales No. 2 y 3 las partes acordaron que los recursos que nuestra entidad entregará, se girarían inicialmente a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente. Credencial, y posteriormente dichos dineros se depositarían en la Fiducia constituida. En tal sentido, se considera contradictorio que Aseguradora Solidaria de Colombia por un lado en su escrito manifieste que "En síntesis, lo que la misma reclamación registra y corrobora los documentos es que ECOPETROL no desembolsó correctamente los recursos correspondientes al Adicional 1 y por no haber ingresado al fideicomiso quedaron por fuera del sistema de control previsto en el "Convenio", lo cual no es cierto porque se evidencia en el análisis efectuado en el acta de liquidación, lo cual reiteramos fue aceptado sin salvedades por parte del ejecutor. Lo mencionado consta en dicha acta en el numeral 4 INCUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR según el cual:

"ECOPETROL S.A. consignó los recursos correspondientes al convenio primigenio, mediante autorización de pago firmada por la funcionaria María Tonelli (directora según social) (anexo No.12), de fecha 07 de septiembre de 2012, por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS COLOMBIANOS (\$3.375.000.000,00), a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente, cuenta apertura para ser consignados allí los recursos del convenio y posteriormente depositados en la Fiducia, hecho que fue verificado por ECOPETROL S.A., según circular 052 de 13 de octubre de 2015, de la Superintendencia financiera de Colombia contrato de fiducia No. 312796.

Los recursos del Adicional No. 1 fueron consignados mediante la autorización de pago por la funcionaria María Tonelli (directora según social) (anexo No.13), de fecha 12 de diciembre de 2012, por valor de DOS MIL MILLONES PESOS COLOMBIANOS (\$2.000.000.000,00), a la cuenta corriente No. 291-01128-6 del Banco de Occidente.

Frente al hecho anterior, es preciso manifestar que en el numeral 2 del Adicional No. 1 se determinó que la entrega del aporte de ECOPETROL S.A. debía efectuarse a la cuenta que fue constituida por la entidad ejecutora al inicio del convenio primigenio, es decir a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente Credencial, y conforme con lo desarrollado en el convenio, depositarios en el contrato de fiducia No. 312796, hecho que no ocurrió pues se consignó en la cuenta corriente No. 291-01128-6 del Banco de Occidente, incumplién dose lo pactado.

822

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

Así las cosas, el Acta de Liquidación Bilateral (Anexo 82 comunicación 2-2016-057-7816) se refiere en los ordinales 4.2.1 y 4.2.2 del numeral 4.2 al estado final de ejecución del Contrato Adicional No. 1, concluyendo que el valor de los ítems pactados ejecutados fue de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS (\$985.925.308), que el valor de los ítems pactados no ejecutados fue de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$12.681.866), que el valor ejecutado por los ítems no previstos y reconocidos por ECOPETROL fue de NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y



DGS - REGIONAL ORINOQUIA

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$920.362.978) y que el valor no ejecutado de los ítems no previstos fue de OCHENTA Y UN MILLON VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$81.029.848), concluyendo que el saldo a favor de ECOPETROL por concepto de la inexecución del Adicional 1 es de NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$93.711.714), tal y como se observa en la siguiente tabla:

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
 Abogado U. Externado de Colombia
 Maestrando en Administración Pública ESAP

BOGOTÁ, COLOMBIA, 11 DE AGOSTO DE 2014

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$920.362.978) y que el valor no ejecutado de los ítems no previstos fue de OCHENTA Y UN MILLON VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$81.029.848), concluyendo que el saldo a favor de ECOPETROL por concepto de la inejecución del Adicional 1 es de NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$93.711.714), tal y como se observa en la siguiente tabla:

ADICIONAL 1		
Valor ítems pactados ejecutados	\$	985.925.308,00
Valor ítems pactados no ejecutados	\$	12.681.866,00
Valor ejecutados ítems no previstos	\$	920.362.978,00
Valor no ejecutado ítems no previstos	\$	81.029.848,00
TOTAL		\$ 1.906.288.286,00
		\$ 93.711.714,00

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, ECOPETROL incluyó dentro del pago de la indemnización solicitada a la Aseguradora Solidaria de Colombia por la póliza 905-47-994000000913 de buen manejo y correcta inversión de los recursos del Convenio 5211512 por concepto del Adicional No. 1 el valor de NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$93.711.714).

El derecho de pago por indemnización de la póliza 905-47-994000000913 de buen manejo y correcta inversión de los recursos le asiste a ECOPETROL de manera indiscutible e ineludible debido a que como se mencionó los recursos entregados en virtud del Adicional 1 fueron cubiertos por los Anexos 1 y 2 de la póliza mencionada, fueron entregados al tomador de la póliza esto es la Corporación Red País Rural, y en un 95.31% fueron ejecutados en los conceptos para los cuales fueron destinados, circunstancias completamente evidenciadas tanto en el Acta de liquidación celebrada por las partes como en sus anexos, y a su vez completamente aceptada sin salvedad alguna.

Es decir que, el presunto daño patrimonial estaría dado por el valor de los ítems pactados no ejecutados en cuantía de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$12.681.866,00), por cuanto el valor no ejecutado de ítems no previsto fue certificado como realizado por parte de la gestora, tal como se logra evidenciar en el informe que presento la señora Ana Milena Estupiñán Pinto, septiembre de 2014, y en el informe final al convenio 5211912 de los adicionales No. 01 y 02, siendo el señor WILSON DE LA CRUZ administrador y JAVIER IGNACIO MOLINA gestor técnico:

823

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

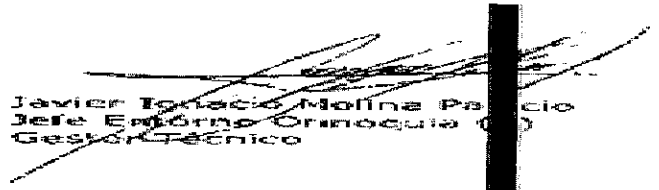
PETROL

INFORME TÉCNICO FINAL CONVENIO 5211512 COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE ACACIAS ADICIONAL N° 01 Y 02

AGOSTO DE 2015

CONVENIO COLABORACIÓN	UN 5211517
OBJETO	Fortalecimiento de las capacidades productivas de las asociaciones y sectores productivos identificados como altamente competitivos en el marco de los procesos y planes regionales de desarrollo desde una perspectiva de sostenibilidad y correspondencia funcional.
SOCIOS	Comunidad Red Paz Rural, NIT 501.131.206-8 R/L Sede Antioquia Varones
EJECUTOR	Comunidad Red Paz Rural
VALOR INICIAL TOTAL	\$ 310.000.000
APORTE ECOPEPETROL	\$ 175.000.000
APORTE ALIADO	\$ 135.000.000
FECHA DE INICIO	2 de Octubre de 2012
PLAZO INICIAL	12 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2 de Abril de 2014
FECHA ADICIONAL N°1	6 de diciembre de 2012
ADICIONAL N°1 VALOR	\$ 224.500.000
APORTE ECOPEPETROL	\$ 100.000.000
APORTE ALIADO	\$ 124.500.000
VALOR TOTAL + AD N°1	\$ 1.734.000.000
FECHA ADICIONAL N°2	6 de septiembre de 2013 - Y SE ADICIONAN 12 MESES MAS
ADICIONAL N°2 VALOR	\$ 1.081.007.990
APORTE ECOPEPETROL	\$ 523.502.990
APORTE ALIADO	\$ 557.475.000
VALOR TOTAL + AD N°2	\$ 6.795.507.990
FECHA ADICIONAL N°3	6 de Diciembre 2013
ADICIONAL N°3 VALOR	\$ 2.407.605.691
APORTE ECOPEPETROL	\$ 2.342.605.691
APORTE ALIADO	\$ 65.000.000
VALOR TOTAL CONVENIO	\$ 13.203.113.689
APORTE TOTAL ECOPEPETROL	\$ 12.245.136.689
APORTE TOTAL ALIADO	\$ 956.975.000
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2 de Abril de 2015
ADMINISTRADOR	PERSONA DE LA CRUZ
GESTOR TÉCNICO	JAVIER IGNACIO MOLINA

Dicho informe fue elaborado por:


Javier Ignacio Molina Palacio
Jefe Entorno Orinoquia (C)
Gestor Técnico

Revisor: Javier Ignacio Molina Palacio
Elabora: Zuleyda Patricia Escada Martínez
Ingeniera Agrónoma

Documentos que pueden ser consultados en el link
50001333300820170035300 ACT INCORPORAEXPEDIENTEDIGIT
ALIZADO 1908202042256pm cc5517200ccf4706becff219fb5183d6
(1).pdf

Significa lo anterior que, no existe certeza del presunto daño patrimonial a la Empresa Colombiana de Petróleos, en lo que respecta al adicional uno que como se indicó se cumplió al 100%.

De manera que, al no existir plenamente claridad en lo que hace referencia al elemento del daño, alegado por Ecopetrol al momento de la liquidación y además no se tiene certeza de cuanto fue lo que realmente se ejecuto y en que valor se realizó, por ello el daño en los 93 millones de pesos no está del todo claro.

Además es importante indicar que al momento en que se edificó el daño, la normativa fiscal exige para tener por cierto ese ítem que se desarrolle no solamente la demostración objetiva del mismo, sino que, se exponga como se creo la gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna y así mismo exponer cual fue la acción u omisión endilgable a los funcionarios públicos vinculados y, si su acción u omisión se puede calificar como dolosa o culposa, además de una explicación de si las mencionadas situaciones son causa directa y eficiente del detrimento al patrimonio del Estado, y tal como se ha venido indicando que la afirmación que el daño en cuantía de \$288.711.714,00 corresponde únicamente al tema del giro del adicional No. 1, es equivocada, imprecisa y desconoce el material probatorio obrante en el expediente, especialmente la comunicación de la aseguradora donde manifiesta como se taso dicho valor y lo identificó en dos ítems, donde salta a la

vista lo relacionado con los gastos de administración y el tema del adicional No. 1, el cual realmente si se ejecutó en su totalidad, tal como se demuestra en los informes técnicos realizados por Ana Milena Estupiñán y Javier Molina.

Es importante indicar que producto de esta situación que planteo la aseguradora el acto administrativo, no expone cual es la acción u omisión endilgable a cada uno de los presuntos responsables para tener por cierto el daño en la forma en que fue tasado por el Honorable Despacho del Contralor y, esto constituye un equivoco insubsanable que obliga a la Contraloría a proferir un nuevo acto administrativo que apertura el proceso y lo ajuste a las reales condiciones en que sucedió, porque en el caso de la doctora MARIA DEL CARMEN TONELLI, no se le puede hacer extensivo lo atinente a la ejecución del convenio y los costos administrativos del mismo, por el hecho de que ella era un tercero ajeno al proceso y el acto que ella desarrollo fue autorizar un desembolso que la partes al interior de la relación contractual decidieron que se realizara en esos términos y, atendiendo a que la responsabilidad fiscal, parte de un daño creado por la acción u omisión de una persona al hacérsele extensiva situaciones donde ella no participó, el daño a ella endilgado en la forma en que se está presentando no es posible atribuírselo porque violaría sus derechos de defensa y contradicción y habría un exceso en la atribución de responsabilidad, por el hecho de atribuirle situaciones donde ella no tiene control ni participación en las mismas, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional al sentar las bases del daño en materia de responsabilidad fiscal.

Por ello se predica la existencia de una nulidad que afecta el proceso de responsabilidad fiscal, a partir del auto de apertura de la investigación.

II. ANALISIS DE LA IMPUTACIÓN:

El proceso de responsabilidad fiscal, que adelantan las contralorías municipales, departamentales y la general de la república, procedimiento reglado por la ley 610 de 2000 que consagro en su artículo 1.

"El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado."

Del precepto normativo antes reseñado, se debe destacar, que el proceso de responsabilidad fiscal es un trámite administrativo a cargo de las contralorías, cuyo objeto es la declaratoria de responsabilidad de un funcionario público o particular con la condición de gestor fiscal, quien con su comportamiento en la forma de acción u omisión genera un daño al patrimonio estatal.

De manera que las contralorías para lograr la declaratoria de responsabilidad al funcionario público del cual se acusa como agresor del patrimonio público debe probar y demostrar la ocurrencia de tres grande ejes temáticos a los cuales se les denomina -elementos de la responsabilidad fiscal-, de acuerdo con el artículo 5 de la ley 610 de 2000, que dispone.

“ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. *La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:*

- *Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.*
- *Un daño patrimonial al Estado.*
- *Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”*

De la normativa fiscal se puede concluir que los elementos que componen la responsabilidad fiscal son el daño patrimonial al estado, la conducta dolosa o gravemente culposa de la persona que realiza la gestión fiscal y el nexo de causalidad entre daño y la conducta del gestor fiscal.

3.1 ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL Y SU CONFIGURACION EN EL CASO CONCRETO.

A. EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.

El daño patrimonial al Estado es uno de los tres elementos que configuran la responsabilidad fiscal, su demostración estará a cargo del fallador instructor del trámite, siempre apegándose a que lo enunciado en el artículo 6 de la normativa fiscal, que dispone.

ARTÍCULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inoportuna, que en términos generales, no se aplique

al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.

Del artículo precedente, se extraen los siguientes puntos a tener en consideración, el daño ha de entenderse como una lesión al patrimonio público, que se representa en la disminución, menoscabo, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, que derivara de la acción u omisión de un determinado sujeto, que bien será un servidor público o particular que produzca o intervenga la mencionada lesión al patrimonio estatal.

Para complementar lo antes dicho se hace necesario acudir a las decisiones jurisprudenciales de las altas cortes, donde se haya trato el tema del daño en el proceso de responsabilidad fiscal, encontramos la sentencia C-340 de 2007 donde la corte constitucional se pronuncio y analizo el tema en los siguientes términos

"De acuerdo con la norma que se estudia, para que exista responsabilidad fiscal debe haber una "lesión del patrimonio público", sin la cual no existe daño patrimonial al Estado. El legislador utiliza el concepto jurídico de "lesión" para precisar el concepto general de "daño" lo cual implica que debe tratarse de un daño antijurídico.

A renglón seguido, la norma señala cual es el objeto sobre el que recae la lesión y expresa que éste pueden ser los bienes o recursos públicos, o los intereses patrimoniales del Estado.

Luego describe el contenido de la lesión, al indicar que ésta puede consistir en menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro.

b. En segundo lugar, la norma contiene el criterio de imputación del daño antijurídico, y precisa que el mismo debe ser el resultado de una gestión fiscal por servidor público o particular que obra con dolo o culpa.

Como modalidades de la gestión que pueden conducir a la responsabilidad fiscal la norma enuncia la gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.

4.2. Lo primero que cabe observar a partir del análisis del anterior contenido normativo es que la expresión "intereses patrimoniales" es una referencia al objeto sobre el que recae el daño. De manera general puede decirse que el objeto del daño es el interés que tutela el derecho y que, tal como se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional, para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, razón por la cual entre otros factores que han de

valorarse, están la existencia y certeza del daño y su carácter cuantificable con arreglo a su real magnitud.^[17] De este modo, no obstante al amplitud del concepto de interés patrimonial del Estado, el mismo es perfectamente determinable en cada caso concreto en que se pueda acreditar la existencia de un daño susceptible de ser cuantificado, los daños al patrimonio del Estado pueden provenir de múltiples fuentes y circunstancias, y la norma demandada, de talante claramente descriptivo, se limita a una simple definición del daño, que es complementada por la forma como éste puede producirse. Así, la expresión intereses patrimoniales del Estado se aplica a todos los bienes, recursos y derechos susceptibles de valoración económica cuya titularidad corresponda a una entidad pública, y del carácter ampliamente comprensivo y genérico de la expresión, que se orienta a conseguir una completa protección del patrimonio público, no se desprende una indeterminación contraria a la Constitución”²

Del fallo anteriormente, expuesto tenemos que el daño en materia de responsabilidad fiscal, no es cualquier tipo de daño al que hacemos referencia sino el que adquiere el calificativo de antijurídico, lo que implica que no cualquier tipo de lesión es sancionable y de intereses para el proceso de responsabilidad fiscal, sino solo aquellas que adquieran el calificativo de antijurídico, calificativo que no fue desarrollado de manera especial por el legislador, lo que implica que debemos remitirnos a las reglas generales del daño, generando así que se deba recurrir a lo expuesto por la jurisprudencia y la doctrina, donde resulta acertado recordar lo adoctrinado por el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 23 de mayo de 2012, numero de radicación 17001-23-3-1000-1999-0909-01 (22592), Consejero Ponente Enrique Gil Botero.

² Sentencia C-340 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil

827

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

“El daño antijurídico, entendido como la lesión a un derecho o bien jurídico o interés legítimo que los demandantes no están obligados a soportar, (...) entonces, el daño entendido como la lesión a un interés protegido por el ordenamiento jurídico, y que la persona no está en el deber de tolerar”

De manera que el daño tendrá por antijuridico, cuando el agredido no tuviere la obligación de soportar el mencionado menoscabo en sus intereses, pues de encontrarse justificación legal o contractual a la intervención lesiva en sus intereses, este perdería la condición de antijuridico, por lo que no se debe indemnizar, ni mucho menos sancionar al servidor publico en virtud de la acción de repetición o el proceso de responsabilidad fiscal. Verbi gracia un boxeador que al estar en una pelea, presenta un fractura en su quijada y le debe ser reconstruida, por la magnitud del golpe recibido a manos de su adversario en el marco de la actividad deportiva, este último no podría ser sancionado por el hecho de que la propia victima acepto los riesgos de la actividad y por lo tanto nos encontramos en una causal de justificación que se denomina culpa de la víctima o la asunción del riesgo jurídicamente desaprobado, tal como la explicado de manera unánime la jurisprudencia civil, penal y administrativa al referirse al tema en materia de responsabilidad del estado colombiano frente a los particulares.

Ahora bien, el tribunal constitucional, en sentencia C-333 de 1996, al analizar el tema del daño antijuridico, se permitió precisar.

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado. Sin embargo, una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

Así, desde el punto de vista histórico, en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente se observa la intención de plasmar en la normatividad constitucional esta noción de daño antijurídico, que es tomado a su vez del artículo 106 de la Constitución española que consagra la responsabilidad patrimonial del Estado en los siguientes términos:

"Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos."

Nótese que el sistema español consagra un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado que no representa un mecanismo sancionatorio: la indemnización no es una pena que deba sufrir el agente del daño en razón de su culpa, sino que es un dispositivo que se funda en la posición de la víctima pues se busca garantizar que el menoscabo del orden patrimonial o extrapatrimonial que ésta haya sufrido sea adecuadamente reparado. Por ello puede haber daño antijurídico, sin que exista culpa de la autoridad o falla del servicio real o supuesta.

Por lo tanto, la responsabilidad pasa a reposar de este modo sobre un principio abstracto de garantía de los patrimonios, dejando de ser una sanción personal por un comportamiento inadecuado para convertirse en un mecanismo adecuado de reparación que se pone en funcionamiento solo si, y en la medida en que, se ha producido una lesión patrimonial".^[3]

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado

sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esta concepción fue la base conceptual de la propuesta que llevó a la consagración del actual artículo 90. Así, la ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Asamblea Constituyente señaló lo siguiente sobre este tema:

"En materia de responsabilidad patrimonial del Estado, se elevan a la categoría constitucional dos conceptos ya incorporados en nuestro orden jurídico: el uno, por la doctrina y la jurisprudencia, cual es el de la responsabilidad del Estado por los daños que le sean imputables: y el otro, por la ley, la responsabilidad de los funcionarios.

La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.

La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la Administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como "la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar", por lo cual "se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo". Por consiguiente, concluye esa Corporación, "el daño antijurídico puede ser el efecto de una

causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva^[5].

la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización.

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo.

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

*"(S)on dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico que consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar."*³

De manera que de acuerdo a la expuesto por la corte constitucional, se debe tener por cierto que el daño que deberá ser reparado es el daño que resulta antijurídico, calificativo que adquiere el supuesto suceso que se acuso de dañoso, cuando se logra constar que quien lo padece no estaba en el deber jurídico de soportarlo, sin importar si la actividad era lícita o ilícita, lo que implica que lo que se sanciona y es merecedor de reparación es que se ponga a la víctima en una condición de indefensión la cual esta no debe soportar y como consecuencia de ello, se debe reparar para tratar de retrotraer los efectos al estado anterior de situación lesiva.

Lo anterior resulta importante para el proceso de responsabilidad fiscal, por el hecho de que el daño al patrimonio público, para ser reparado por los presuntos infractores debió ser un daño que la entidad estatal no estaba en el deber jurídico de soportar, como consecuencia de unas actuaciones irregulares.

A su turno la sentencia SU-620 de 1996, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, sostuvo que:

"(...) el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el

³ Sentencia C-333 de 1996, MP. Alejandro Martínez Caballero

daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa (...). Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud... En efecto, en la investigación se va a establecer la certeza de los hechos investigados, la incidencia de éstos en la gestión fiscal y a qué personas en concreto se les puede imputar la responsabilidad por las irregularidades cometidas". Resaltado y subrayado no es del texto. Con fundamento en la norma y lo dicho por la Corte Constitucional, el daño debe ser:

- De orden patrimonial: Por cuanto el daño ocasiona una lesión al patrimonio del Estado, esto es, a los bienes y recursos públicos, pues de no tratarse de estos, el daño producido no sería competencia de Contraloría General de la República.

- Debe ser cierto: No puede tratarse de un perjuicio eventual o hipotético, ni de meras posibilidades, o de una simple especulación. Debe quedar establecida la certeza de su ocurrencia (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2001, Rad. 25000-23-26-000-1993-9314-01 C.P. Allier Eduardo Hernández Enríquez) . Del acervo probatorio debe evidenciarse que el gestor fiscal por su acción u omisión efectivamente lesionó el patrimonio Público, que ocasionó un daño.

Debe ser objetivamente verificable: Debe ser tangible, verificable, lo que se puede establecer a través de protocolos o pruebas periciales.

- Debe ser cuantificable: Debe poderse expresar numéricamente, en valores, en cantidades, conforme a su real magnitud.

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

- Debe ser antijurídico: Debe ser un daño que el Estado no está en la obligación jurídica de soportar como resultado de la gestión irregular del servidor público o particular que obra con dolo o culpa grave”

Habiéndose realizado ya un análisis exhaustivo del daño en materia de responsabilidad fiscal, se procederé a realizar el estudio de las imputaciones que hizo el despacho del contralor provincial ponente en el auto 392 de 2024, fundamento la imputación de este elemento en los siguientes términos.

El daño patrimonial; para el caso de estudio que hoy nos ocupa, se encuentra representado en incumplimiento contractual del Convenio No. 5211512: ya que el giro de los recursos por parte de ECOPETROL S.A. al contratista no es invertido en su totalidad en la ejecución de obras como tampoco yace en las cuentas bancarias de la Fiduciaria, ni en la entidad contratista.

La concreción del daño, se encuentra contenida al detalle en el Acta de Liquidación del Convenio; en la cual, se concluye un saldo a favor de ECOPETROL S.A. por valor de **\$3.043.984.518,01**. Por lo que se procede a ejecutar la Póliza (No. 905-47-994000000913) que ampara el cumplimiento del Convenio, en este caso recuperando por este medio la suma de **\$2.755.272.804**, ante la Aseguradora Solidaria, y el saldo o valor restante (**\$288.711.714**) no es reconocido por la Aseguradora por cuanto el pago del Adicional No.1 (\$2.000.000.000), debido a la falta de cuidado del administrador del convenio, de la gestoría técnica y de la directora de gestión social que ordeno el pago; estos recursos no ingresaron a la cuenta de la fiducia, por el contrario, se giró a la cuenta bancaria del contratista. En consecuencia, al violarse las condiciones del convenio y del contrato de seguro, la Aseguradora Solidaria de Colombia objeta parte de la indemnización correspondiente, alegando la no obligatoriedad de amparar el valor de este anticipo, debido a la concurrencia irregular de los funcionarios o presuntos responsables sobre los cuales recae la determinación del perjuicio o daño, máxime cuando en la actualidad no ha sido resarcido la totalidad del daño fiscal causado.

Encuentra la defensa de la investigada Tonelli, que el fundamento para tener por cierto el daño en el presente proceso de responsabilidad fiscal, tiene cabida en que al momento en que se profirió el acta de liquidación del convenio 5211512, se logro determinar la existencia de un saldo a favor de Ecopetrol S.A, por el valor de 3.043.984.518 de pesos colombianos, por lo que se procedió a realizar la reclamación a la aseguradora que expidió la póliza 905-47-9940000009, en la cual se amparaba el cumplimiento del contratista respecto al convenio.

Póliza que logro ser afectada y en virtud de ello se le entregaron 2.755.272.804 de pesos por parte de aseguradora Solidaria de Colombia a Ecopetrol del valor que se consigno en acta como saldo a favor del mismo, sin embargo quedo un saldo restante por el valor de 288.711.714, el cual no fue reconocido por la aseguradora por cuando corresponde al pago del adicional 1, por el hecho de que se consigno a una cuenta diferente a la del encargo fiduciario, por cual, la mencionada aseguradora considero que había lugar a realizar el pago total del presunto saldo a favor de Ecopetrol SA.

Bajo los anteriores términos, estructura el despacho la imputación, respecto del daño, sin embargo lo expuesto por el despacho resulta equivocado, por el hecho de que al verificar el acta de liquidación bilateral del convenio suscrita entre la señora RUBIELA BARAJAS en calidad de administradora y la Corporación Red Pais Rural.

Al verificar el expediente del proceso de responsabilidad fiscal, en el arco denominado como hallazgo se logra evidenciar una tabla donde hacen una discriminación del mencionado saldo a favor de

ECOPETROL S.A, en la siguiente forma.

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 5211512									
CONVENIO	APORTE DE ECOPETROL	VALOR EJECUTAD	% EJECUTADO FINANCIERO	% EJECUTADO TECNICO	VALOR NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO TECNICO		
PRIMIGENIO	\$ 3.375.000.000,00	\$ 2.781.935.296,64	82%	82%	\$ 593.064.703,36	18%	18%		
ADICIONAL No. 1	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.906.288.286,00	95%	95%	\$ 93.711.714,00	5%	39%		
ADICIONAL No. 2	\$ 4.523.532.998,00	\$ 2.192.877.638,00	48%	65%	\$ 2.330.655.360,00	52%	35%		
ADICIONAL No. 3	\$ 2.347.605.691,00	\$ 2.016.586.633,00	86%	100%	\$ 331.019.058,00	14%	0%		
TOTAL	\$ 12.246.138.689,00	\$ 8.897.687.853,64	73%	77%	\$ 3.348.450.835,36	22%	23%		
REINGRESO DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO					\$ 304.466.317,35				
REDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA FIDUCIA					\$ 85.211.725,15				
SALDO A FAVOR DE ECOPETROL					\$ 3.043.984.518,01				

se hicieron 4 pagos en total, donde existió un pago primigenio por el valor de 3.375.000.000 de pesos, donde no se ejecuto por parte del contratista 593.064.703,36 de pesos. Del adicional 1 se tiene que se entregaron 2.000.000.000 de pesos de los cuales únicamente se consigno que no se ejecuto el valor de 93.000.000 de pesos, respecto al adicional 2 se tiene que se entregaron 4.523.532.998, donde el recurso no ejecutado correspondió al valor de 2.330.655.360 de pesos y por su parte del adicional 3 se entrego al ejecutor 2.347.605.691 de pesos de los cuales no se ejecutaron 331.019.058 de pesos.

Que al momento de sumarse arrojan un resultado a favor de ECOPETROL de 3.348.450.835, valor al que se le debía descontar el reintegro por parte del encargo fiduciario por un valor de 304.466.317,35, para obtener como resultado el valor de 3.043.984.518 de pesos, valor que le fue reclamado por parte de la compañía Colombiana de Petróleos a la entidad aseguradora en virtud de las pólizas que ampararon el convenio. La compañía aseguradora, en virtud de la reclamación, reintegro a Ecopetrol el valor de 2.755.272.804 de pesos, quedando un valor restante de 288.711.714 de pesos, dinero que no le fue reintegrado a Ecopetrol, en virtud de la objeción que presento la aseguradora, donde se objeto por lo relacionado al adicional 1 y los costos administrativos del convenio 5211512 de 2012.

Sin embargo, la Gerencia colegiada del Meta adscrita a la Contraloría General de la República, a lo largo de todo el proceso decidió que todo el valor que constituye el daño correspondía a la situación que aconteció derivada del adicional 1, lo que resulta equivocado a todas luces pues al analizar la objeción presentada por la Aseguradora Solidaria de Colomba, se logra constatar que lo acontecido que la aseguradora sustentó la negativa en lo relacionado al aporte del adicional 1 en el valor de \$93.000.000 y lo relacionado con los gastos de administración por cuantía de 195000000 de pesos para tener un total de \$288.711.714 pesos.

En ese orden de ideas y atendiendo a lo anterior se encuentra que el daño corresponde a \$93.711.714 y a \$195.000.000,00, lo que desvirtúa la afirmación del despacho en lo relacionado al daño de \$288.711.714 por cuenta del adicional 1 que se giró en cuenta diferente a la que se debía girar, pero no por voluntad propia de la Directora de Gestión Social doctora Maria del Carmen Tonelli, sino porque, las partes del negocio jurídico así lo decidieron y prueba de ello es que así lo reconoce la administradora del convenio de colaboración No. 5211212 de 2012, cuando indico:

Alana la atención del escrito de la aseguradora que únicamente se refiere a lo acordado en el Adicional No. 1, desconociendo que para cada uno de los grupos electuados por Ecopetrol tallo para el aporte inicial, como para los Adicionales No. 2 y 3 las partes acordaron que los recursos que nuestra entidad entregara, se giraran únicamente a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente (Credencial), y posteriormente dichos dineros se depositaran en la fiducía constituida. En tal sentido, se considera contradictorio que Aseguradora Solidaria de Colombia por un lado en su escrito manifieste que "En síntesis, lo que la misma reclamación registra y corroboran los documentos es que Ecopetrol no desembolsó correctamente los recursos correspondientes al Adicional 1 y por no haber ingresado al fidecomiso quedaron por fuera del sistema de control previsto en el "Convenio", lo cual no es cierto porque se evidencia en el análisis efectuado en el acta de liquidación, lo cual reiteramos fue aceptado sin salvedades por parte del ejecutor. Lo mencionado consta en dicha acta en el numeral 4 INCUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR según el cual:

ECOPETROL S.A. consignó los recursos correspondientes al convenio primigenio, mediante autorización de pago firmada por la funcionaria Maria Tania (directora gestión social) (Anexo No. 1), de fecha 07 de septiembre de 2012, por valor de \$93.715.000,000,00, a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente (Credencial), cuenta abierta para ser consignados allí los recursos del convenio y posteriormente depositados en la fiducía, hecho que fue verificado por ECOPETROL S.A. según escrito 052 de 13 de octubre de 2015, de la Superintendencia Financiera de Colombia contra el contrato de fiducía No. 312796.

Y más adelante indica:

De lo anteriormente citado, es claro que la Corporación Red Vais forma parte de la liquidación aceptó y reconoció que se constituyó en un incumplimiento de su parte el no haber girado a la cuenta del patrimonio autónomo constituido los dineros mediante el Adicional No. 1, por lo cual la oportunidad tanto para como para el ejecutor como para la entidad aseguradora para efectuar alguna salvedad sobre el tema se encuentra completamente superada.

832

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

ALIZADO 1908202042256pm_cc5517200ccf4706becff219fb5183d6
(1).pdf.

Así las cosas, no es posible que el despacho haga extensiva la responsabilidad por el no pago de \$288.711.714,00 a Ecopetrol S.A por parte de la aseguradora Solidaria de Colombia, pues los gastos derivados de la administración del mismo, no fueron producto del actuar de la doctora MARIA DEL CARMEN TONELLI, por el hecho de que ella no era la funcionaria autorizada o suscriptora del convenio, la administradora del mismo, gestora técnica del convenio, ni siquiera participo en el mismo, al punto tal que ella, no aparece como firmante en las actas de seguimiento del mismo, en el clausulado del bilateral, la liquidación no la realizo ella, el manejo del recurso en lo relacionado a los gastos de administración no correspondía a ella en términos de la vigilancia del mismo, desembolso y verificación, pues de acuerdo a la clausula 4 del mismo estos \$195.000.000,00 millones de entregaron a titulo de administración, los cuales debían ser vigilados por el gestor y el administrador del convenio, mas no por la líder de gestión social - MARIA TONELLI-, por lo cual no puede ser endilgarle dicha situación a ella.

Ahora bien como otro argumento para considerar en lo relacionado al punto de los 195.000.000 millones de pesos, es que María del Carmen Tonelli, no planeo el convenio, no dio lugar a la clausula que consagro dicho valor como gastos administrativos, razón por la cual no le puede ser atribuible.

Resulta importante traerle a colación al despacho que uno de los reproches que realizo la aseguradora, fue que dichos gastos por concepto de administración, es que su reconocimiento constituiría una fuente del enriquecimiento sin justa causa, porque la naturaleza del contrato de seguro es meramente indemnizatoria, donde dichos gastos eran erogaciones que debía hacer el asegurado ECOPETROL SA por ello debía demostrar Ecopetrol, como dicho valor constituyo un daño

que debía ser indemnizado, acción que no estaba en cabeza de MARIA DEL CARMEN TONELLI, sino por el contrario de la administradora del convenio que realiza la liquidación del mismo doctora RUBIELA BARAJAS LEGUIZAMO, quien fue la persona que realizó la liquidación y la reclamación ante la aseguradora y al considerar este punto no demostró porque, se lesiona a Ecopetrol en lo relacionado a demostrar un daño en este punto del valor de los costos de administración.

Sin embargo, la Aseguradora Solidaria por intermedio de oficio N° ISP-0526 - RSP06955 del 9 de noviembre de 2016, se pronuncia sobre el reclamo, presentando OBJECIÓN PARCIAL, disponiendo el pago de \$2.755.272.8043 a título indemnizatorio y señalando que no le asistía responsabilidad frente:

1. Al valor reclamado por concepto de aportes girados para el Adicional N° 1 cifrado en \$93.711.714, y
2. Los costos administrativos de manejo del convenio por \$195.000.000.

La primera de ellas, argumentando que, los recursos fueron consignados en una cuenta diversa a la creada por la entidad ejecutora al inicio del negocio jurídico, es decir, al fideicomiso y, frente a la segunda, aduciendo que era un costo administrativo que no podía trasladar.

Frente al primer tópico, la cláusula cuarta del Convenio de Colaboración N° 5211512 de 2012 denominada "VALOR Y FORMA DE LOS APORTES", las partes establecieron como valor total del negocio jurídico la suma de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

PESOS (\$3.510.000.000), los cuales discriminaron de la siguiente manera:

a) ECOPETROL S.A., aportaría un valor de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$3.375.000.000), representado en dinero. De ese valor, \$195.000.000 son costos de seguimiento atados, exclusivamente, a reconocer gastos propiamente administrativos, es decir, aquellos generados por el manejo administrativo del Convenio. En estos costos están incluidos: i) el acompañamiento financiero y contable a la ejecución de los recursos para cada uno de los proyectos derivados del convenio marco, ii) el apoyo a la realización de las compras y entregas de insumos previstas en los alcances, y iii) el apoyo a la gestión interinstitucional para el jalonamiento de recursos de fuentes públicas y privadas.

b) La CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL aportaría un valor de CIENTO TREINTA CINCO MILLONES DE PESOS (\$135.000.000) representados en los siguientes bienes y servicios, para la administración logística, traslados y gastos del equipo técnico y administrativo: Estructuración de propuestas productivas. Desarrollo de eventos de capacitación técnica y organizativa. Certificación de empresas. Seguimiento técnico a convenios.

Es decir, que ECOPETROL S.A., de los dineros que aportaba, la suma de \$195.000.000 correspondían a los gastos administrativos, es decir, aquellos generados por el manejo administrativo del convenio, razón por la cual, los mismos no están amparados en la póliza N° 905-47-994000000913 que respaldó el cumplimiento y buen manejo de los recursos aportados por ECOPETROL en la ejecución del Convenio de Colaboración N° 5211512 de 2012.

Vale la pena indicar a la Contraloría que MARIA DEL CARMEN TONELLI no tenía la calidad de funcionaria autorizada, ni planeadora ni cualquier ropaje que le diera facultades para exigirle al contratista que realizara la solicitud a la póliza para que amparara estos costos administrativos. Razon por la cual, no asiste respetuosamente razón al despacho para que, endilgue responsabilidad patrimonial a la señora TONELLI en cuantía de \$195.000.000,00 por concepto de los gastos de administración del convenio, pues se reitera en el clausulado general del convenio no se indico que en el objeto del contrato de seguro, se debían amparar los valores destinados para gastos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1088 del Código de Comercio "los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para el fuente de enriquecimiento" y según el artículo 1089 ibídem, "la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario."

Además en cabeza de ella no estaba la obligación de hacer esa exigencia al contratista ya que, dicha función le correspondía a la funcionaria autorizada quien fue quien suscribo el contrato y en caso de que exista un presunto daño patrimonial debe ser llamada a responder por dicha omisión, pues es la que da lugar al daño presuntamente.

Ahora bien en relación al punto relacionado con el giro del adicional No. 1, se tiene por cierto que de acuerdo a la comunicación realizada por la funcionaria Rubiera Barajas a la aseguradora Confianza de Colombia, la misma indica que el desembolso irregular del adicional No. 1, no correspondió a una decisión lateral de Ecopetrol, sino por el contrario fue una decisión consentida entre ambas partes, es decir País Rural y Ecopetrol y en virtud de ello, fue que se ordenó hacer dicho desembolso

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

a la mencionada cuenta y correspondió al ejecutor País Rural consignar dichos recursos en la cuenta fiduciaria del Banco de Occidente.

Es importante en este punto aclarar que, María del Carmen Tonelli no tenía la facultad al interior del convenio para ser quien negociase dicha modificación consensuada de las partes, de entregar los dineros a la cuenta del Banco Occidente perteneciente directamente a País Rural ya que, ello era una función del administrador y los demás sujetos que intervinieron directamente en el convenio y lo que, se le decía a la funcionaria era que se debía desembolsar el recurso en la cuenta del Banco de Occidente de País Rural a la cual ella considero que era la adecuada e idónea y a la que se debía desembolsar, desconociéndose qué María del Carmen Tonelli no tenía participación directa en el convenio sino por el contrario su función era que se autorizara el pago y ese pago que se autorizaba en virtud de las actuaciones que realizaba el administrador, el gestor, el funcionario autorizado y los funcionarios que tuvieran intervención directa dentro del proceso y, además en virtud del principio de confianza cuando se realizaban los desembolsos quien los autorizaba era el administrador Gonzalo Murillo para la época de los hechos y, debía ser él quien entrase a responder por qué se hizo la mencionada modificación.

Sin embargo, al analizar la respuesta efectuada por la aseguradora solidaria de Colombia el problema no fue el giro a la cuenta diferente sino que no se le notificó a la aseguradora de dicha modificación para que la misma la aceptase y, procediera a indemnizar y, esta comunicación no le correspondía a María del Carmen Tonelli, por el contrario correspondía a los funcionarios de Ecopetrol que te hubieran el manejo del convenio y al ejecutor País Rural.

Con lo anterior, surge un interrogante: ¿Si lo que se exigía era la notificación de la modificación del convenio a la aseguradora, le correspondía a MARIA DEL CARMEN TONELLI, realizarla? Interrogante que se resuelve indicando que No, pues su función se

circunscribe a autorizar los pagos pero que ya venían verificados por los funcionarios encargados en el convenio, en los comités de seguimiento y verificación que los hacía en este caso el administrador, el ejecutor, gestor técnico y el gestor administrativo y a partir de ello, era que se tramitaban los pagos junto con los adicionales. Resultando importante aclarar que, si la función no tenía una intervención directa dentro del convenio sino su función se circunscribe únicamente a autorizar el pago que ya estaba viabilizado por el administrador del convenio, resulta extraño que, se pueda pensar que la acción fiscal de ella es antieconómica, ineficaz, o cualquier tipo de cosas, cuando ella lo hace en virtud de la confianza plena de que lo que se autoriza será usado en el convenio y, efectivamente se utilizó por ello al momento en que se hace el balance económico, se hacen los informes técnicos y todas las actuaciones dan cuenta de que el avance y la inversión del recurso sí se estaba ejecutando.

Con ello se logra demostrar que la actuación de María del Carmen Tonelli no cumple el requisito del daño fiscal establecido en el artículo de 6 de la ley 610 de 2000, en el cual indica que el daño patrimonial sea producto de una acción idónea realizada por un particular o servidor público en la modalidad de dolo o culpa grave; entonces aparecen dos elementos: en primer lugar, no se puede predicar en la culpa y el dolo frente a la señora Tonelli, cuando ella lo hace en virtud del principio de confianza y de la habilitación que se le dio por parte del administrador del convenio y de la modificación que hicieron ellos al interior de sus relaciones y prueba de ello, es que si verificamos el expediente el proceso de responsabilidad fiscal, lo única actuación es que ella suscribe es la autorización de pago, verificando que sea el ejecutor, que sea un número de cuenta que del Banco de Occidente y que, corresponda el dinero que se autoriza por aporte de Ecopetrol en el marco del convenio.

Entonces en ese orden de ideas no podemos predicar que la acción sea inadecuada para pretender las funciones fiscales y tampoco se logra demostrar la culpa grave y el dolo que requiere para atribuir el daño en materia fiscal, sumado a ello, se hace necesario aclarar que de acuerdo a la contestación proferida por la aseguradora Solidaria de Colombia, para que este adicional hubiese sido cubierto por ellos, se debió haber notificado a la aseguradora de la variación del contrato en relación a ese adicional No. 1 el acuerdo que hicieron las partes de consignarlo a la cuenta de País Rural, para que este posteriormente lo consignará en la fiducia del Banco de Occidente y recaía como obligación del Fideicomitente decidir si acepta o no la modificación y si la amparaba; de manera que, pudiese existir el giro irregular que nace en virtud de un acuerdo entre las partes y, que al no ser comunicado a la aseguradora, era lógico que la aseguradora no iba responder y no iba a hacerse responsable de los daños que pudieran surgir de la mencionada relación.

Ahora bien, es importante indicar como se explicó en la nulidad relacionada al tema del daño que no hay certeza del daño imputable a la señora María del Carmen Tonelli porque la señora María del Carmen Tonelli, es quien realiza únicamente la aprobación de que se envía el dinero a la cuenta del Banco Occidente del País Rural para que sea transferido a fiducia y, no estaba bajo su cargo el convenio sino bajo el cargo de funcionarios diferentes a ella y allí se logra vislumbrar que las personas que directamente participaron en el convenio, certificaban que el avance del convenio del adicional No.1 , se estaba desarrollando técnica y financieramente de acuerdo a los estándares que se esperaba y eso se prueba con los informes de interventoría técnica suscritos por Ana milena Estupiñán y Javier Molina, dónde se ve la el avance y cómo se estaba desarrollando el convenio razón por la cual en esto el daño no está plenamente configurado, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1088 del Código de Comercio "los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento" y según el artículo 1089 ibídem, "la

indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario." Así mismo, en el artículo 1060 del Código de Comercio.

Téngase en cuenta que, el problema no fue el desembolso, que se haya modificado el convenio, sino que la cláusula 4.12 de las generales de la póliza, advierte que las modificaciones que no hayan aceptado previamente la aseguradora, no le serán oponibles; de manera que, al momento en que iban a realizar el pago en la cuenta de diferente, se debió avisar a la aseguradora de dicha modificación para que esta la aceptara o no y, con ello que, le fuese oponible. Es por ello que, surge plenamente que esta función no le era imputable a María del Carmen Tonelli, porque ella no era la funcionaria con la dirección y manejo directo del convenio, sino por el contrario, fue una instancia posterior a este modificadorio, resultando necesario y pertinente aclarar ello, porque al momento en que se decide hacer esa modificación por los intervinientes directos del convenio, lo que se debió haber hecho antes de que se ordenara el pago y, se viabilizará dicho pago, era informarle a la aseguradora que habían hecho una modificación y, que se iba a consignar el adicional en una cuenta del Banco de Occidente que no era la que normalmente se venía consignando y, que se iba a entregar el dinero al encargo fiduciario y estaba en cabeza del asegurador aceptar o no dicha modificación: Así las cosas, es posible afirmar que la señora María del Carmen Tonelli no fue quien dio lugar a la real problemática que impidió a Ecopetrol recuperar los \$93.000.000.

3.2. DEL NEXO CAUSAL

Frente a este acápite esta defensa considera que, el argumento expuesto a folio 35 del auto de imputación de responsabilidad fiscal, adolece de nulidad, teniendo en cuenta que la Contraloría no emitió un análisis individual respecto del mismo, además al haber edificado

036

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

desde el auto de apertura y todas las actuaciones subsiguientes que el daño, correspondía a los \$288.714.711,00 producto del giro inadecuado del adicional No. 1, el cual al verificar el expediente procesal, específicamente la objeción presentada por la aseguradora, el valor en su totalidad no le es imputable al giro irregular del convenio sino por el contrario a otras actuaciones propias del mismo, de las cuales, el despacho al no haber realizado una adecuada estructuración del daño atendiendo a los dos componentes que conforman la presunta cuantía que atribuyo genera que, el nexo causal para la señora MARIA DEL CARMEN TONELLI, se vea quebrantado porque no le pueden hacer extensivo una obligación derivada de no haber solicitado al ejecutor que al momento de suscribir la póliza en esta se hubiera consignado que, los gastos por concepto de administración también serían objeto de indemnización y además que el problema no fue el giro a cuenta diferente sino que al momento en que se realizó dicha modificación, no se le comunicó a la aseguradora si asumía dicha situación como asegurable.

Por otra parte, resulta importante indicar que, el nexo de causalidad como su nombre lo indica hace referencia al análisis pormenorizado y detallado del comportamiento en la modalidad de ACCIÓN U OMISIÓN del investigado, justificando el grado de culpabilidad y confrontarlo con el daño y cual fue el grado de injerencia, que tuvo la actuación desplegada por dicho funcionario, lo que brilla por su ausencia en el presente auto de imputación, pues solamente se menciona lo siguiente:

13.3 Del nexo Causal. Como bien se puede evidenciar, los presuntos responsables relacionados con la asunción de funciones respectivamente, todos tenían la obligación de vigilancia y control respecto de la correcta ejecución del convenio 5211512. De donde, conforme al análisis de lo preceptuado en la guía para la administración Gestión de contratos y convenios No. 29-11-2012-V-11 (normatividad interna) y del mismo análisis de pruebas, se llega a la conclusión que existió una total omisión en el cumplimiento de la normatividad interna y por consiguiente no se logró garantizar el cumplimiento satisfactorio del convenio, ni la salvaguarda de los recursos públicos; esto es, no existió el seguimiento continuo de los adelantos de obra que justificaran la aprobación del giro de recursos.

Así las cosas, conforme a la omisión de las anteriores premisas, obligaciones y normas citadas, y que fueron desconocidas por los presuntos responsables fiscales, lo cual constituye una clara omisión a sus deberes y obligaciones, de donde fácilmente se establece una gestión Fiscal Negativa, la cual genera un presunto daño fiscal imputable a título de culpa grave, en contra de Corporación Red País Rural con representación legal de Julio Cesar Zuleta Fuentes, por no haber cumplido con el objeto del convenio No.5211512, Ana Milena Estupiñán Rincón, María del Carmen Tonelli Sokolich y Gonzalo Murillo Escobar, por la omisión de las funciones que el cargo le imponía cargo, y por no haber cumplido con las obligaciones preceptuadas en el convenio No.5211512 de 2012.

En donde la culpa grave se entiende como aquella que: *“consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca*

prudencia suelen emplear en sus negocios propios” y una conducta dolosa como en la que *“el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado”* (artículo 5, Ley 678 de 2001)

Es decir que no emprende el análisis individual del nexo y pese a que indica que el daño fiscal es imputable a título de culpa grave, no la desarrolla y genera además confusión que impide el ejercicio del derecho a la defensa, pues en el inciso final del acápite correspondiente al nexo explica en que consiste la culpa grave y el dolo, lo que es impreciso.

Además, el despacho al momento en que estructura las normas que permiten tenerse como quebrantadas por la investigadora María del Carmen Tonelli, señala los criterios de la culpa grave y dolo del código civil, sino explicar el porqué, lo que, es importante atendiendo a que para imputar un cargo en cualquiera de los elementos, es necesario realizar un juicio de subsunción, y no señalar las normas de manera general pues no permite su comprensión al momento contestar la

imputación, pues las normas citadas no fueron desarrolladas, pues se citaron de manera general, así:

13.2.3) MARÍA DEL CARMEN TONELLI SOKOLING; presunta responsable fiscal que autoriza el pago del adicional 1, a la cuenta particular de la Entidad ejecutora y no de la Cuenta de la fiducia del Convenio, de acuerdo al Clausulado General, se desempeñó o hizo las veces de **directora Gestión Social**; y conforme a la guía para la administración y Gestión de contratos y convenios No. 29-11-2012-v-1; le correspondía ejercer funciones entre otras como:

1. Direccional, implementar y evaluar las acciones orientadas al cumplimiento de la promesa de valor establecida por Ecopetrol S.A. con la Sociedad, la Comunidad y las que correspondan con los grupos de interés Estado, Socios y Contratistas, para asegurar la gestión responsable de las relaciones de la empresa con estos grupos de interés y la sostenibilidad empresarial.
2. Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el modelo normativo de seguridad informática en el rol de usuario informático.
3. Aplicar las políticas y procedimientos de HSEQ establecidas en la organización
4. Conocer y aplicar la normatividad vigente que le aplica en la ejecución del convenio.
5. *Atender las demás funciones que sean asignadas por su jefe inmediato."*

Así las cosas de haberse revisado las funciones y normativas que expone el despacho como quebrantadas, para sustentar los errores endilgados a la investigada, no se logra vislumbrar cuál fue la norma que pretendió hacer valer el despacho para edificar el grado de culpabilidad, tal como lo ha dicho el Consejo de Estado en ponencia el 24 de febrero de 2016 consejero ponente Martha Nubia Velázquez Rico, indicó que: " para determinar la existencia de culpa grave o dolo el juez no debe solo limitarse a las definiciones contenidas en el Código Civil sino que también debe tener en cuenta las características particulares del caso y armonizarlo con lo previsto en el artículo 6 y 91 de la Constitución Política sobre responsabilidad del servidor público, como también la asignación de funciones contemplan los reglamentos manuales respectivos. Resulta igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son la buena y mala fe."

En ese orden de ideas, no se puede en primer lugar atribuir la culpa grave o el dolo con fundamento en las normas generales del Código Civil porque el Código Civil para el dolo tiene por cierto, es la intención positiva de hacer daño a otro y por culpa grave la desatención elemental que se realizan sus negocios siendo equívale a la comisión en el negocio que hasta la persona más negligente hubiese tomado la precaución para no haber desarrollado lo que se hizo situación en la cual María del Carmen Tonelli no cumple ninguna de las dos a las voces del 63 del Código Civil, sin embargo pretendiendo el despacho complementarlo con los manuales y reglamentos de la institución de acuerdo a las funciones y reglamentos que cito no se logra tampoco comprobar como ella los quebranto y modificar gratuidad razón por la cual el elemento de culpabilidad no está plenamente acreditado y como consecuencia de ello se debe archivar el proceso de responsabilidad fiscal y absolverla por estar indebidamente imputado.

VI. SOLICITUD

Con fundamento en los argumentos ya expuestos, le solicito respetuosamente al despacho, lo siguiente:

1. Se declare la nulidad de lo actuado pues examinada la situación a la luz de la ley 610 de 2000, con fundamento en las deficiencias que presenta el auto de APERTURA DE INVESTIGACIÓN.

2. Se EXONERE de responsabilidad fiscal a la señora MARIA DEL CARMEN TONELLI.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ARCHIVE el presente proceso de responsabilidad fiscal.

IV. PRUEBAS

Con el propósito de ejercer el derecho de contradicción y defensa, bajo la pertinencia de esclarecer los hechos objeto de la controversia, se solicita se oficie al Juzgado 8 Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio para que allega a este expediente todas las actuaciones surtidas en el marco del proceso radicado bajo el No. 500001333300820170035300, en donde reposan todas las pruebas de carácter documentación y testimonial que permiten demostrar los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollo el convenio de colaboración No. 5211512 y como fue la participación de la doctora Maria del Carmen Tonelli y las razones del adicional No. 1, además de las actuaciones que realizó ECOPETROL frente a la aseguradora.

Además y atendiendo a la carga procesal propia me permito allegar el link de consulta del expediente administrativo
[50001333300820170035300 ACT INCORPORAEXPEDIENTEDIGIT
ALIZADO 1908202042256pm cc5517200ccf4706becff219fb5183d6
\(1\).pdf.](#)


Prueba que es fundamental para demostrar la ajenidad en los hechos de la señora MARIA DEL CARMEN TONELLI.

Carlos Alejandro Bautista Eugenio
Abogado U. Externado de Colombia
Maestrando en Administración Pública ESAP

V. NOTIFICACIONES

A efectos de surtir notificaciones las recibo en el edificio comité de ganaderos oficina 803, al correo electrónico bautistacarlos123456789@gmail.com, teléfono 3008091406.

Atentamente y con el acostumbrado respeto al señor Contralor.


CARLOS ALEJANDRO BAUTISTA EUGENIO
C.C. No. 1.121.956.345 de Villavicencio
T.P. 407.023 del C.S.J